

Miguel Ángel Gracia



Múltiples aerogeneradores en un paisaje rural de Aragón, que es la segunda potencia eólica de España.

Energías renovables

La eólica alerta del pacto PP-Vox, que puede «frenar inversiones»

El sector considera el acuerdo «restrictivo» y anticipa las consecuencias económicas de las limitaciones a las nuevas plantas

JORGE HERAS PASTOR
Zaragoza

El acuerdo entre PP y Vox para gobernar Aragón sigue generando reacciones más allá del debate político y el polémico concepto de «prioridad nacional». También en el ámbito empresarial y, en particular, en uno de los sectores donde la comunidad juega en primera división: el eólico. La industria del viento, clave en liderazgo energético de este territorio, considera que algunas de las medidas planteadas en materia de renovables introducen incertidumbre sobre el desarrollo futuro de nuevos proyectos.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE), principal patronal del sector en España, ha expresado sus reservas ante el compromiso de limitar la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos en suelos productivos o de uso tradicional. En declaraciones a este diario, advierte que este tipo de planteamientos introduce elementos que pueden ralentizar el despliegue de una tecnología que es «palanca de seguridad y competitividad nacional para generar electricidad competitiva y libre de emisiones, atraer inversión y fortalecer el tejido industrial y el empleo».

El punto de fricción está en el compromiso del Ejecutivo auto-

nómico de «emplear todos los medios legales y administrativos necesarios» para evitar la instalación de macroparques eólicos y fotovoltaicos en suelos productivos, terrenos de uso tradicional o espacios con afecciones al patrimonio natural. Una declaración que, en el sector, se interpreta como un cambio de tono que podría traducirse en mayores restricciones.

«Introducir criterios excluyen-

El despliegue debería situarse «al margen de posicionamientos ideológicos», considera la patronal

tes de carácter general o restricciones indiscriminadas no solo resulta contradictorio desde el punto de vista normativo, sino que puede comprometer el cumplimiento de los objetivos energéticos, frenar inversiones estratégicas y limitar oportunidades de desarrollo económico en el medio rural», advierte Juan Virgilio Márquez, director general de la AEE. El directivo subraya que el despliegue eólico debería situarse «al margen de posicionamientos ideológicos» como uno de los pilares de la estrategia energética nacional.

Las críticas llegan en un territorio donde la eólica es un actor

protagonista. Aragón supera ya los 6.000 megavatios (MW) instalados y es la segunda comunidad autónoma en potencia y producción, solo por detrás de Castilla y León, que le duplica en superficie. En 2025, el viento volvió a ser el motor del sistema eléctrico aragonés, aportando cerca de la mitad de toda la generación.

El peso de esta tecnología ha sido determinante para que la comunidad alcance cifras récord de producción eléctrica –más de 22.000 GWh el pasado año– y para que las renovables sigan representando más del 80% del mix. También ha sido un factor clave en la atracción de inversiones industriales intensivas en consumo energético, como los centros de datos, que explican el fuerte repunte de la demanda eléctrica que se está produciendo en la comunidad –un 7% más en 2025 frente al 2,8% del conjunto de España–.

Uno de los argumentos centrales del acuerdo político –la protección del suelo productivo– es precisamente el que la patronal AEE rebate con más contundencia. «La eólica es, por definición, una tecnología compatible con el uso agrario del suelo», defiende Márquez. «Permite la continuidad de actividades como la agricultura y la ganadería y genera rentas adicionales para el territorio. Nunca sustituye usos, los complementa», asevera. ■